

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Por sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5611-2022, caratulados *“Barrenechea / Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)”*, el Tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; acogió la demanda sólo en cuanto declara que existió una relación laboral entre las partes, desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2022, y que el despido indirecto del actor, efectuado el 30 de junio de 2022 ha sido ajustado a derecho, incumpliendo gravemente su empleador las obligaciones que imponía el contrato de trabajo y, en consecuencia, condenó a la referida demandada al pago de las prestaciones que se indican, rechazándose la demanda en todo lo demás, más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63 y 173, ambas disposiciones del Código del Trabajo y artículo 22 de la Ley N°17.322.

En contra de dicha sentencia ambas partes recurrieron de nulidad.

La parte demandante fundamenta su recurso en dos causales interpuestas en forma subsidiaria.

Como causal principal y subsidiaria invoca la contemplada en el artículo 477 del referido Código del Trabajo, esto es, por haberse incurrido en infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Solicita, en relación a la causal principal, que se anule parcialmente la sentencia por haber incurrido en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haber incurrido en infracción de ley al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 17 y 19, ambas normas del Decreto Ley N°3.500, y a los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del citado Código del ramo, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto, el pago de las prestaciones adeudadas que fueran concedidas, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que ahora se condene al pago



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SWCXNCTSFV

íntegro de las cotizaciones previsionales, incluidas la de salud por todo el periodo demandado, y a la sanción de nulidad del despido.

En subsidio, la recurrente demandante solicita que se anule parcialmente la sentencia recurrida, por haber incurrido en la causal del mentado artículo 477 del Código del Trabajo, por haber incurrido en infracción de ley al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación con los mencionados artículos 17 y 19, ambas disposiciones del referido Decreto Ley N°3.500, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, acto seguido se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido indirecto, el pago de las prestaciones adeudadas que fueran concedidas, los recargos legales, los intereses y reajustes legales, pero que ahora condene, además, al pago íntegro de las cotizaciones previsionales, incluidas las de salud, por todo el periodo demandado.

A su turno, la demandada fundamenta su recurso en tres causales interpuestas en forma subsidiaria. A saber, causal principal del artículo 477 del Estatuto Laboral, esto es, cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En subsidio, la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando se ha incurrido en infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Finalmente, como segunda causal subsidiaria, dedujo el motivo de invalidez del artículo 478 literal c) del comentado cuerpo de leyes laborales.

Pide que se anule la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes, con costas;

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día dos de abril último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DE LA DEMANDANTE.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SWCXNCTSFV

Primero: Que, la parte demandante fundamenta su recurso en la causal principal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, en la cual denuncia vulnerados dos grupos de normas.

1° grupo: infracción de ley del artículo 58 del Código del Trabajo, artículos 17 y 19, ambos del Decreto Ley N°3.500, por falsa aplicación de ley, que recae en el considerando Duodécimo de la sentencia.

Expone que la demandada le adeuda a su representada, cada una de las cotizaciones de seguridad social, propias de la existencia de una relación laboral, por todo el período trabajado, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y -en consecuencia- se ordene al pago de estas.

Indicó que sin perjuicio que el mismo tribunal declarase la existencia de una relación laboral entre las partes y que concluyó por despido indirecto, este incurre en una falsa aplicación de ley al dejar de aplicar la norma del citado artículo 58 del Código del Trabajo, respecto de las cotizaciones de salud de su representado.

Refiere que la normativa vigente a la materia que nos convoca no hace distinción alguna respecto a cuáles cotizaciones deberán ser enteradas y declaradas por el empleador, por lo que al no condenar al pago de cotizaciones previsionales de salud y habiéndose establecido que existieron -en el plano formal- sucesivos contratos de honorarios entre las partes, debió entonces la juez aplicar la norma del artículo 58 del Código del Trabajo, en relación a los referidos artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, condenando a la demandada al pago íntegro de todas las cotizaciones previsionales de la demandante, sin efectuar distinción respecto de las cotizaciones de salud, AFP y AFC.

2° grupo. infracción de ley de los incisos 5°, 6° y 7° del artículo 162 del mencionado Código del Trabajo, en cuanto a la sanción de la nulidad del despido por interpretación errónea, vicio que refiere recaer en el considerando Décimo Tercero de la sentencia impugnada.

Expone que la sentenciadora reconoce todos efectos jurídicos de la declaración de la relación laboral en el caso de marras, tales como, estimar que el despido indirecto fue justificado, pago de los años de servicios, mes



de aviso previo, pago de feriado proporcional, la condena a los recargos legales, y, en el considerando Undécimo, consigna que no le fueron pagadas ni enteradas al actor sus cotizaciones de seguridad social por parte de su empleador. Sin embargo, no acoge la demanda de nulidad del despido, que corresponde justamente a la sanción que le cabe al empleador negligente que no cumple con su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de su trabajador en las instituciones previsionales a las cuales este se encuentra afiliado.

A mayor abundamiento refiere que la norma del artículo 162 del Código del Trabajo no establece que la sanción de la nulidad del despido solo es procedente cuando el empleador no es un organismo de la Administración del Estado.

Señaló que el fallo incurre en una errónea interpretación de ley, toda vez que, verificada la hipótesis de la norma, es decir, el no pago durante la relación laboral de todas las cotizaciones previsionales del periodo de la relación laboral, la juez del grado no condena al pago de las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen hasta la convalidación del pago de las comentadas cotizaciones.

Segundo: Que en el primer acápite del recurso de la parte demandante se denuncia una falsa aplicación de ley, vicio que en su opinión recae en el considerando Undécimo de la sentencia, por cuanto la normativa vigente no hace distinción alguna respecto de cuáles cotizaciones deberán ser enteradas y declaradas por el empleador. Así, sostiene que -habiéndose establecido una relación de trabajo- debió entonces la sentenciadora aplicar la norma del artículo 58 del referido cuerpo de leyes laborales, en relación con los tantas veces citados artículos 17 y 19 del mentado Decreto Ley N°3.500, condenando a la demandada al pago íntegro de todas las cotizaciones previsionales de la demandante, sin efectuar distinción respecto de las cotizaciones de salud, AFP y AFC.

Tercero: Que, en efecto, en el primer párrafo del motivo Duodécimo la sentenciadora -en lo medular- estableció que “...*el actor se pagó las cotizaciones previsionales en FONASA desde julio de 2017 a junio de 2022, razón por la cual no se condenará a la demandada a efectuar el*



pago de dichas cotizaciones, ya que se trata de cotizaciones que fueron debidamente solucionadas por el actor, quién conforme a la normativa imperante en base a la relación “a honorarios” que vinculada a las partes, efectuó el referido pago, tratándose de una obligación que se encuentra cumplida, no existiendo ningún daño previsional que reparar. Además, se trata de aportes asistenciales que solamente beneficiarían a la referida institución dado que el trabajador no podrá recibir prestaciones con cargo a estos aportes, dado que no son otorgados de forma retroactiva, la que implicaría que el referido órgano se enriquecería injustamente.”

Cuarto: Que, de este modo, no puede haber infracción a las normas legales denunciadas, pues en el caso concreto, las cotizaciones de salud estaban pagadas por el mismo trabajador y no podría existir una duplicidad de pagos, lo que deriva en que las disposiciones que se estimaron infringidas no resultaban aplicables y, por lo mismo, indefectiblemente procedía el rechazo de la demanda en estos tópicos.

Por otro lado, conforme a la reciente jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, a modo ejemplar en los antecedentes N° 5132-2022, 13.351-2022 y 147.785-2022, se ha establecido que *“el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional...”*

Quinto: Que respecto del segundo acápite del recurso, en que se acusa infracción de ley por la no aplicación del efecto de la nulidad del despido, se debe relevar que en el segundo párrafo del motivo Décimo Tercero, la juzgadora -en lo medular- estableció que *“...no puede la demandada convalidar el despido a su mero arbitrio con el pago de cotizaciones previsionales, dado que se veía impedida por la relación*



existente entre las partes, quien en base a la normativa vigente, no podía contratar en la categoría de “contrata” ni “planta”, pues se trata de cargos permanentes asignados previamente por ley a cada institución, ni bajo el Código del Trabajo por inexistencia de norma que lo habilite para ello, tratándose de contratos que gozaban de presunción de legalidad bajo el estatuto bajo al cual se encontraban amparados... ”.

Sexto: Que respecto de la sanción de nulidad del despido con relación a un órgano público, esta Corte adscribe a la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, manifestada en los autos N°37.339-2017, 36.601-2017, 28.229-2018, 4.440-2019 y 21.989-21, entre muchos otros, en orden a que *“tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de esta punición, pues fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido”.*

Séptimo: Que, entonces, no puede haber infracción a las normas legales denunciadas, por lo que el arbitrio deberá ser rechazado.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DE LA DEMANDADA.

Octavo: Que la parte demandada enarbola como causal principal la contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Este vicio lo agrupa en la vulneración de cinco grupos de normas:

1°grupo: infracción del artículo 1° de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo y artículo 15 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con el artículo 11 del citado Estatuto Administrativo.

Afirma que sobre la base a dichas normas resulta que las relaciones entre el demandante y la JUNAEB estaban sometidas a normas de orden



estatutario y, el Servicio se ciñó a la normativa del artículo 11 del comentado Estatuto Administrativo para contratar sus servicios, dado que ese cuerpo de leyes le faculta expresamente para la contratación de personal bajo honorarios y no de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, el que resulta inaplicable para decidir la controversia de autos.

Refiere que yerra la juez del grado al estimar que circunstancias como la obligación de asistencia, el cumplimiento de turnos, tener derecho a permisos, descanso anual, acceso a capacitación, recibir instrucciones de parte del servicio que le contrató, entre otras circunstancias, obligaban a calificar esta prestación de servicios como un contrato de trabajo, ya que todos esos aspectos –al igual que la vigencia de cada contrato de honorarios, sus renovaciones o el término del mismo- se encontraban pactadas al amparo del régimen legal establecido en el artículo 11 del comentado Estatuto Administrativo, el que autoriza a que dichas modalidades pueden acordarse en un contrato de prestación de servicios a honorarios.

Agrega que la sentenciadora de base también se equivoca cuando concluye que, en el caso, no habría existido una contratación para servicios específicos pues, en este sentido, según consta de la documentación allegada al proceso por ambos litigantes, fue contratado con fines específicos en cada ocasión que suscribió un contrato de honorarios. En efecto, el actor ingresó a prestar servicios para la JUNAEB en virtud de un contrato a honorarios que tuvo por antecedente la aprobación del financiamiento por parte del Estado. En síntesis, el actor durante el tiempo que prestó servicios a honorarios para la JUNAEB, lo hizo realizando labores específicas, y sus contratos de trabajo contemplan una descripción prolija y detallada de sus funciones que es, justamente, lo que la juez de la instancia exige de tales contratos para encontrarse en la hipótesis del mencionado artículo 11 del Estatuto Administrativo.

2º grupo: infracción a los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Al respecto, refiere que el demandante fue contratado a honorarios con estricto apego a las normas que regulan a la JUNAEB. A su vez, el secretario general de su Servicio carece de facultades para contratar



personal conforme a las normas del Código del Trabajo por lo que, de haberlo hecho, el contrato habría sido nulo por infracción al principio de legalidad y su suscripción habría acarreado responsabilidades administrativas para esa autoridad.

3º grupo: infracción a los artículos 1, 3 letras a) y b), 5, 7, 8, 160, 162, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que en caso de marras no puede estimarse aplicable el mentado Código del Trabajo, habida cuenta que su aplicación supletoria se refiere a funcionarios de la Administración, en circunstancias que las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad de funcionarios o trabajadores del Estado, es decir, no son, jurídicamente, funcionarios públicos, sino que son contratados sobre la base de honorarios sometidos exclusivamente a las normas de su respectivo contrato de prestación de servicios, de suerte que en este caso cabía negar lugar a una aplicación supletoria del Código del Trabajo en cuanto ésta se refiere a funcionarios públicos regidos por estatutos o regímenes especiales.

4º grupo: infracción de los artículos 1545 y 1546 del Código Civil.

Estima vulnerados dichos artículos al no ser aplicados debidamente al caso de autos, que señalan que los contratos son ley para los contratantes, al transgredirse la ley del contrato que vinculó a las partes.

5º grupo: infracción al artículo 4º inciso segundo y artículo 9 inciso tercero del Decreto Ley N° 1.263 de 1975 sobre Administración Financiera del Estado, en relación con los artículos 1 de las Leyes de Presupuesto de los años 2015 al 2022.

Finalmente, en lo que dice relación con este motivo de nulidad, establece que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa (Ley Anual de Presupuestos) y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso, pues los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo.

Noveno: Que, al respecto, en el sexto párrafo del motivo Octavo, la sentenciadora -en lo medular- estableció que “...*como se desprende de la prueba rendida, las labores realizadas por el actor no pueden ser*



consideradas como labores esporádicas y específicas, ya que se trata de funciones necesarias para el adecuado y correcto funcionamiento de JUNAEB, al tratarse de labores administrativas relacionadas con contratos, licitaciones, proveedores y pagos, las que resultan fundamentales e indispensables para que dicha institución pueda realizar sus diversos cometidos y cumplir con sus objetivos?

Décimo: Que, en razón de lo indicado en el motivo que antecede, dado las funciones habituales y propias del funcionamiento de la JUNAEB, la juzgadora de la instancia, estableció una relación laboral entre las partes, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, desde el día 01 de julio de 2015, razón por lo cual acogió la demanda entablada por la actora, en consecuencia –como se dijo- no existe infracción a las normas legales denunciadas, por cuanto en la especie, se constató una extralimitación de la norma que habilitaba al órgano público a contratar mediante un vínculo a honorarios.

Undécimo: Que, en subsidio, invocó la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando se ha incurrido en infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, que recae en los considerandos Octavo y Noveno de la sentencia

Arguye que el tema de fondo en el presente juicio ha sido el establecimiento de una relación laboral entre el demandante y la JUNAEB, lo cual efectúa el tribunal luego de la infracción a las reglas de la lógica. A este resultado se llega por ciertos análisis no coherentes y por el recogimiento parcial de la prueba.

Afirma que la sentencia concluyó que, en la especie, existió entre las partes un vínculo de subordinación y dependencia que ha debido ser regulado según la normativa del Código del Trabajo, al excederse el marco de aplicación del Estatuto Administrativo. Pues bien – afirmó- en primer término, la juez de base no señaló la forma en que, efectivamente, dio valor probatorio a unos u otros de los medios aportado por las partes, sino que, al respecto, se refirió a ciertas pruebas y declaraciones de testigos para, finalmente, concluir que la relación que rigió a las partes fue de naturaleza



laboral.

Agrega que la sentenciadora no reparó en la manifiesta contradicción y mala fe en que el demandante incurrió al suscribir contratos de honorarios, cumplirlos y beneficiarse de su contenido, jamás impugnarlos y, luego, cuando el último de dichos contratos debe terminar por aplicación de sus propios términos, al haber incurrido el actor en una grave falta de probidad, sólo entonces cambiar absolutamente su posición y voluntad para comparecer ante un Juzgado del Trabajo sosteniendo, ahora, que toda esa relación no era lo que él aceptó y validó, sino un vínculo que ha debido regirse por el mentado Código del Trabajo.

Duodécimo: Que, para que prospere la causal alegada por el recurrente demandado, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Décimo tercero: Como se puede colegir del arbitrio, respecto del primer supuesto, esa condición no concurre en la especie, pues el impugnante se limita a discrepar del fallo y a formular su propia apreciación de la prueba rendida, criticando el raciocinio valorativo que hace la juez de base en el considerando Noveno, en el cual concluye que se tuvo por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de julio de 2015 al día 30 de junio de 2022.

Como puede advertirse, la sentenciadora hace uso de su facultad privativa de valorar la prueba, atribución que la ley no le concede al litigante, razón por lo cual el primer supuesto antes referido no se cumple en la especie.

En cuanto al segundo requisito, el recurso tampoco lo satisface, pues solo alude en forma genérica a que la sentencia atenta contra la lógica, sin detenerse a precisar qué principio lógico o en su caso, máxima de la experiencia han sido infringidas y menos aún aclara de qué forma se produce esa infracción.

Décimo cuarto: Finalmente, en su exposición ante esta Corte, el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SWCXNCTSFV

abogado compareciente de la parte demandada se desistió de la segunda causal subsidiaria, a saber, la estatuida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechazan** sin costas los recursos de nulidad deducido por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5611-2022, caratulados “*Barrenechea / Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)*”, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro Aguilar.

Laboral-Cobranza N° 1244-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SWCXNCTSFV

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jaime Balmaceda E., Alejandro Aguilar B. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SWCXNCTSFV